



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA CIVIL

Medellín, diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2.023)

MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
RECUSACIÓN: 05001 22 03 000 2023 00104 00

Recusante: Apoderado de la parte demandante, en el proceso 05001 31 03 018 2023 00003 00.  
Recusado: JUEZ DIECIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.  
Extracto: Declara infundada recusación, y compulsa copias para que se investigue la actuación del apoderado de la parte actora.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve la recusación en referencia, formulada dentro del proceso con radicado 05001 31 03 018 2023 00003 00.

ANTECEDENTES

JAVIER EMILIO FRANCO ROLDÁN demandó a ALIRIO SERNA ARIAS y a DANIELA GUTIÉRREZ GAVIRIA, pretendiendo, entre otras, que se declare que estos últimos incumplieron el contrato promesa de compraventa celebrado con el actor el 9 de octubre de 2.006, referente a los inmuebles con Matrículas Inmobiliarias 001–630696, 001–630717, 001–0630718 y 001–0630719.

Tal demanda correspondió al JUZGADO DIECIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín, Despacho que en auto del 8

de febrero hogaño la inadmitió, exigiendo se subsanaran algunos requisitos<sup>1</sup>.

Al respecto, el apoderado por activa presentó recurso de reposición, al tiempo que incoó “*Solicitud de recusacion y declaración de incompetencia*” (sic)<sup>2</sup>, donde en relación a lo último se argumentó que se debe devolver la demanda a la oficina de reparto, pues el juzgador otrora tramitó proceso divisorio entre las mismas partes bajo el radicado 05001 31 03 006 2007 00266 00, en el que según el recusante “... se afectaron los derechos e intereses del señor JAVIER EMILIO FRANCO ROLDAN”, lo que ocasionó en su momento la presentación de acción de tutela.

Por todo ello, indicó que existe “*conflicto de intereses*” que comprometen la imparcialidad del Juzgador.

En decisión del 20 de febrero anterior, el funcionario recusado argumentó, en síntesis, que lo indicado no tiene la entidad de generar impedimento que lo aparte del conocimiento en el caso de marras.

Explicó que este proceso ya había sido presentado bajo el consecutivo 05001 31 03 018 2022 00349 00<sup>3</sup>, donde por la misma razón fáctica también hubo recusación, la cual se negó, decisión que esta Corporación avaló el 10 de noviembre de 2.022 al resolver el trámite respectivo. De otro lado, sobre la aludida acción constitucional, se trató de la radicada 05001 22 03 000 2020 00346 00, la cual fue negada en primera y segunda instancia, declarándose infundado lo pedido<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Ver archivos 03 y 11 en el Expediente Digital (E.D.).

<sup>2</sup> Archivos 12 y 13 E.D.

<sup>3</sup> Asunto que el 30 de septiembre de 2.022 fue inadmitido, ya el 9 de diciembre de igual año se rechazó.

<sup>4</sup> Archivo 14 ídem.

Llegado el asunto a esta Corporación, nos pronunciamos según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 140 del C. G. del P., visto en armonía con el inciso 3° del artículo 143 ídem, previas:

### CONSIDERACIONES

La teleología de la recusación –así como de los impedimentos-, es la de dotar a la actuación judicial de las garantías de imparcialidad e igualdad para las partes (artículos 13 Constitución Nacional y 4° del C. G. del P.), buscando que los asuntos sean resueltos de manera objetiva, *“sin preconcepciones fácticas ni jurídicas que condicionen el criterio del fallador por haberlo exteriorizado con antelación...”*<sup>5</sup>.

A fin de salvaguardar ese principio de Imparcialidad, así como el de la Independencia Judicial, se han instituido las recusaciones –e impedimentos-, de lo que la Corte Constitucional ha explicado:

*“El propósito de las instituciones procesales de impedimentos y recusaciones consiste en asegurar la imparcialidad del juez, quien debe marginarse del proceso del cual viene conociendo cuando se configura, en su caso específico, alguna de las causas taxativamente señaladas en la ley.”*. Sentencia C-573 de 1.998<sup>6</sup>.

Igualmente, de los artículos 140 y 141 del C. G. del P. se tiene que dichas causales son taxativas o restringidas<sup>7</sup>, por lo que no está

---

<sup>5</sup> Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, providencia AC537 de 2.022.

<sup>6</sup> También se considera el artículo 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

<sup>7</sup> La Corte Suprema de Justicia indicó: *“«[E]n esta materia rige el principio de taxatividad, según el cual sólo constituye motivo de excusa o de recusación, aquel que de manera expresa esté señalado en la ley, por tanto, a los jueces les está vedado separarse por su propia voluntad de sus funciones jurisdiccionales, mientras que a los sujetos procesales no les está permitido escoger a su arbitrio a su juzgador, de modo que las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un determinado asunto a un funcionario judicial, no pueden deducirse por similitud ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en tanto se trata de reglas de garantía en punto de la independencia judicial y de vigencia del principio de*

autorizado que el Juez o Magistrado se abstenga de conocer un asunto con fundamento en hechos que no configuran alguna de las previstas.

Por lo mismo, quien proponga una recusación debe presentarla “... *con expresión de la causal alegada, de los hechos en que se fundamente y de las pruebas que se pretenda hacer valer*” (art. 143 procesal civil); sin embargo, en esta ocasión, el apoderado de la parte demandante no delimitó la causal que soporta sus argumentos, fue ausente la precisión normativa en ese sentido.

No obstante, lo aducido por aquel apunta al conocimiento del funcionario recusado en relación a otro proceso entre las mismas partes (divisorio 05001 31 03 006 2007 00266 00), por lo que en aras de garantizar un pronunciamiento judicial nos referimos sobre la causal contenida en el numeral 2° del artículo 141 del C. G. del P., que reza:

*“Son causales de recusación las siguientes: (...) “2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.”. subrayado intencional.*

Como se observa, dicha causal, específicamente la parte resaltada en la norma citada, al contener la conjunción disyuntiva “o”<sup>8</sup>, deja en claro que existen dos hipótesis para encuadrarse en lo pertinente; esto es, “*Haber conocido del proceso*”, o “(haber) *realizado cualquier actuación en instancia anterior*” -entre paréntesis meramente explicativo-.

En relación a lo primero, *Haber conocido del proceso*”, el interesado lo hace en relación al asunto divisorio 05001 31 03 006 2007 00266 00, del cual no arrimó prueba alguna, de todos modos, ello no configura la

---

*imparcialidad del juez». (CSJ AP2618 de 2015, rad. n° 45.985; criterio reiterado en CSJ AC5368-2019, 11 dic).” AC537 de 2022.*

<sup>8</sup> De ella la RAE en el Diccionario de la Lengua Española, ha indicado: “*Denota diferencia, separación o alternativa, entre dos o más personas, cosas o ideas.*”. <https://www.rae.es/>

causal, nótese que el pleito de marras es distinto desde lo fáctico y pretendido en un asunto divisorio.

En ese sentido, no se concreta ese específico conocimiento, el saber que se dice tiene el funcionario, sería de otro proceso, hecho determinante para colegir que no conoce el asunto que apenas le fue repartido, y aunque no se alega, lo mismo ocurre con el proceso 05001 31 03 018 2022 00349 00, el cual ni siquiera se admitió, por ende, quedó desdibujado el fundamento puntual contenido en el correspondiente supuesto normativo.

Lo referente a “*actuación en instancia anterior*” está atado al factor funcional, lo que aquí se descarta en tanto se trata de un asunto que la primera instancia es conocida por el funcionario recusado, por lo que no hay actuaciones según tal supuesto normativo.

El que se haya presentado y tramitado una acción de tutela contra un Despacho judicial, para nada configura lo endilgado (conflicto de intereses o imparcialidad), por lo que no se estructura motivo para que el recusado se aparte del procedimiento.

De otro lado, el artículo 147 del C. G. del P. indica:

*“Cuando una recusación se declare no probada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposición, en el mismo auto se impondrá al recusante y al apoderado de este, solidariamente, multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que haya lugar.”*

Es decir, ese tipo de multa es solidaria entre la parte y su apoderado, y la misma exige dos cosas, una, la no prosperidad de la recusación, y dos, que se advierta la temeridad o mala fe en la proposición.

Lo primero se cumple, como en líneas anteriores se explicó, no se advierte motivó para que el Juez recusado se aparte del conocimiento del asunto de marras; ahora, en lo tocante a la temeridad o mala fe, según el artículo 79 procesal civil, se presume que ella se presenta, entre otros, *“5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.”*, donde en un asunto como el presente, dados los efectos del artículo 145 del mismo ordenamiento, el proceso se ve suspendido, lo que posiblemente es una talanquera a su normal desarrollo.

Refuerza la anterior idea, el que el recusante conocía lo actuado en el proceso 05001 31 03 018 2022 00349 00, donde bajo los mismos hechos, el mismo apoderado del hoy actor presentó recusación, pedido que inicialmente fue negado por el *a quo*, el que 10 de noviembre de 2.022 fue estudiado por esta misma Sala, decidiéndose como infundado tal pedimento.

De ello se tiene que se empleó la figura de la recusación, cuando ya se conocían dos pronunciamientos judiciales al respecto, por lo que posiblemente se actuó de manera ligera e irreflexiva de cara a la administración de justicia, lo que conlleva que se compulse copias de la integridad del proceso 018 2023 00003, así como del 018 2022 00349, para que la autoridad disciplinaria correspondiente verifique la actuación del abogado GUILLERMO LEÓN MEJÍA RESTREPO.

Finalmente, se impondrá la sanción pecuniaria prevista en el artículo 147 del C. G. del P..

Por lo expuesto, el Tribunal;

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA LA RECUSACIÓN formulada en contra del doctor WILLIAM FERNANDO LONDOÑO BRAND, en su condición de JUEZ DIECIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín, según se motivó.

SEGUNDO: COMPULSAR copias de los procesos 05001 31 03 018 2023 00003 00, así como el 05001 31 03 018 2022 00349 00, a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Imponer al demandante JAVIER EMILIO FRANCO ROLDÁN y a su abogado GUILLERMO LEÓN MEJÍA RESTREPO, de manera solidaria, multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el efecto, compúlsese copia auténtica de esta providencia a la autoridad dispuesta para el cobro coactivo para lo de su cargo.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente a la autoridad judicial de conocimiento para lo de su cargo.

Notifíquese;



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
MAGISTRADO